

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE PAMPLONA

Veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno

TEMA

Procede el despacho a resolver sobre los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, interpuestos por el apoderado de la parte demandante, contra el auto de 27 de agosto del año en curso.

ANTECEDENTES

Habiéndose ordenado la terminación del proceso y sancionado a las partes por su inasistencia a la audiencia inicial de que trata el artículo 372 CGP, el apoderado de la demandante, dentro del término legal, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra esta decisión, en lo que tiene que ver con los numerales tercero y cuarto de la parte resolutive.

El referido profesional del derecho, sustenta su inconformidad, expresando: i) que, son aplicables las consecuencias probatorias y pecuniarias previstas en los incisos 1º y 5º del numeral 4º del artículo 372 CGP, cuando alguna de las partes comparece en la fecha y hora fijada para la audiencia inicial y la diligencia se realiza sin la presencia de la otra parte, incluso si no comparecen los apoderados (núm. 2 inciso 2 ibídem), ii) que, cuando ninguna de las partes concurre a la misma, no se podrá celebrar (núm. 4º inciso 2º ejusdem), lo que deja en evidencia que, si ninguna de las partes comparece, el demandante ya estaría recibiendo una sanción por su conducta, como lo es la terminación anticipada y anormal del proceso, iii) que, una interpretación del mencionado artículo 372 permite concluir que, en caso de inasistencia de ambas partes no son aplicables las sanciones pecuniarias que, regidas por el principio de tipicidad de la infracción son de interpretación restrictiva, iv) que, para la procedencia de la sanción pecuniaria es imprescindible que la parte o apoderado no concurra a la audiencia, de modo que es necesario que se instale la diligencia con alguno de los extremos o sus apoderados para que se consume la infracción y proceda la sanción, v) que, ante la inasistencia de ambas partes la audiencia no se puede celebrar porque no se lleva a cabo, de ahí que la imposición de la multa a la demandante es improcedente, máxime cuando compartiría la imposición de dos sanciones por el mismo hecho, vulnerándose el principio non bis in ídem del derecho sancionatorio, pues dicha conducta estaría siendo castigada, no solo con la terminación del proceso, sino también con la imposición de una multa.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

Se trata de establecer, si es procedente reponer los numerales segundo y tercero de la providencia de 27 de agosto de 2021, o en subsidio conceder el recurso de apelación con fundamento en que se quebrantó el principio de legalidad.

Del tema de los recursos

Sobre el caso que nos ocupa, es necesario precisar que, mediante auto de 27 de agosto del año en curso, se dispuso: 1) aceptar la justificación presentada por el apoderado de la parte actora, por la inasistencia a la audiencia inicial programada para el pasado 18 de agosto, 2) ordenar la terminación del proceso, y 3) sancionar a MARÍA VICTORIA BUITRAGO VALENCIA, como demandante, y al CONJUNTO CAMPESTRE ALTAMONTE, representado legalmente por el SERGIO VÁSQUEZ AGUDELO, en su condición de demandado, cada uno con multa de cinco (5) SMLMV que equivalen a CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS (\$4.542.630); valor que deberá ser consignado en la cuenta No. 3-082-00-00640-8 del Banco Agrario de Colombia, convenio No. 13474, a nombre de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta; dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión (artículo 10 de la Ley 1743 de 2014).

Lo primero que hay que decir es que, uno de los deberes de las partes, como lo refiere el numeral 7º del artículo 78 CGP es “concurrir al despacho cuando sean citados por el juez ...”; sin embargo, en este proceso los extremos litigiosos hicieron caso omiso a lo ordenado mediante auto de 25 de junio del año en curso, pese a que con telegramas se les comunicó oportunamente vía email, la fecha y hora en que se llevaría a cabo la audiencia inicial a través de medio virtual, además se les advirtió sobre la obligación de asistir a ésta y que la desobediencia daría lugar a las sanciones contempladas en el artículo 372 ejusdem.

Ahora bien, los numerales 3º y 4º del proveído de 27 de agosto último, los cuales son objeto de recursos, tuvieron su origen precisamente en que las partes no comparecieron a la referida audiencia inicial de que trata el referido artículo 372, la cual estaba programada para el pasado 18 de agosto, y tampoco presentaron justificación alguna dentro de los tres (3) días de que trata el inciso 3º del numeral 3º de la mencionada norma, excusa que tiene el efecto de exonerar de las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias derivadas de la inasistencia.

Se destaca que, con el referido artículo nuestro estatuto procesal civil, tomó las medidas necesarias para que, las audiencias programadas no sean aplazadas o suspendidas indefinidamente y además para que no se paralice el proceso, motivó por el cual reguló dos consecuencias que conlleva la inasistencia a la referida audiencia, sin que una excluya a la otra, i) la primera de ellas de carácter procedimental, conforme a dos escenarios, de los cuales se hará referencia únicamente al consagrado en el numeral 4º inciso 2º de la mencionada norma, que es el que nos interesa: “cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, ésta no podrá celebrarse, y vencido el término sin que se justifique la inasistencia, el juez por medio de auto declarará terminado el proceso”, y ii) la segunda de orden pecuniario, dispuesta en el inciso 5º del mismo numeral 4º del artículo 372 ibídem, que señala: “a la parte o al apoderado que no concurra a la audiencia se le impondrá multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)”.

Así las cosas, este Despacho ante la negligencia de las partes en el cumplimiento de uno de sus deberes, dio aplicación a la norma antes referida.

En este orden de ideas, no se comparten los argumentos del apoderado recurrente, ya que las sanciones se aplicaron con total apego al principio de legalidad, que en materia civil aparece regulado en el artículo 7º C.G.P., sobre el cual, en diversos pronunciamientos la Corte Constitucional ha adoctrinado, que se concreta en dos aspectos:

- a) Que exista una ley previa que prevea la hipótesis o situación de que se trate.
- b) Que esa tipificación sea precisa en la determinación y consecuencia de dicha situación o conducta, con lo cual se busca limitar al máximo la facultad discrecional de la administración en ejercicio de sus prerrogativas.

En efecto, en este asunto hay un claro marco normativo que estaba vigente para la época en que se realiza la audiencia y que sigue rigiendo sin modificación alguna, cuyo tenor literal tiene una absoluta nitidez, al definir de manera contundente que, la inasistencia de las dos partes a la audiencia sin excusa válida, acarrea la terminación del proceso y multa, sin que esté prevista ninguna distinción referente a que, la sanción pecuniaria sólo aplica por la ausencia de una sola de las partes, ya que esta última se debe imponer a la parte o al apoderado que no concurra, sin más condicionamientos que la falta de una oportuna y verdadera justificación.

De igual manera del estudio de todo el numeral 4o del artículo 372 CGP, se evidencia que, cuando corresponda imponer las sanciones procesales y pecuniarias, estas de ninguna manera son excluyentes, ya que el legislador en su libertad de configuración así lo dispuso, además en la práctica las primeras castigan el abandono y el desinterés para que se adelante debidamente el trámite, mientras que las segundas reprenden el desgaste de la administración de justicia en vano y el desobedecimiento a la citación que les hace el juez, entonces no hay doble sanción para la misma falta, sino dos faltas con dos sanciones.

Así las cosas, este Despacho atendiendo la observancia de las disposiciones procesales, que son de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento, las cuales no pueden ser modificadas por los funcionarios o particulares, concluye que no es viable reponer la providencia de 27 de agosto del año en curso y tampoco conceder el recurso de apelación, ya que si bien es cierto que conforme lo señala el numeral 7º del artículo 321 CGP, el auto que ponga fin al proceso proferido en primera instancia, es apelable, también lo es, que la alzada no está orientada a la orden de terminación del proceso, sino a la sanción impuesta a la demandante por su inasistencia a la audiencia de que trata el artículo 372 CGP.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, El Juzgado,

RESUELVE

PRIMERO: No reponer los numerales tercero y cuarto de la providencia de fecha 27 de agosto de 2021.

SEGUNDO: No conceder el recurso de apelación, toda vez que la alzada no está orientada a atacar la terminación del proceso, sino a la sanción impuesta a la demandante por su inasistencia a la audiencia de que trata el artículo 372 CGP.

NOTIFÍQUESE

**ANGELA AURORA QUINTANA PARADA
JUEZ**

Firmado Por:

**Angela Aurora Quintana Parada
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 001
Pamplona - N. De Santander**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

2d4ae00e9748ddbbae8aa338c5f36263ff30814480d808bfc80bf87f2704bf97

Documento generado en 24/09/2021 09:41:44 a. m.

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

